

Derechos sexuales y reproductivos : la maternidad, una opción como derecho	Título
Cevasco, Gaby - Autor/a;	Autor(es)
Chacarera (No. 35 2007)	En:
Lima	Lugar
Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán	Editorial/Editor
2007	Fecha
	Colección
Mujeres rurales; Movimiento feminista; Cuerpo; Mujeres; Derechos reproductivos; Maternidad; Mortalidad materna; Interculturalidad; Aborto; Perú;	Temas
Artículo	Tipo de documento
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Peru/cmp-flora-tristan/20120823050836/maternidad35.pdf	URL
Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.0 Genérica http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es	Licencia

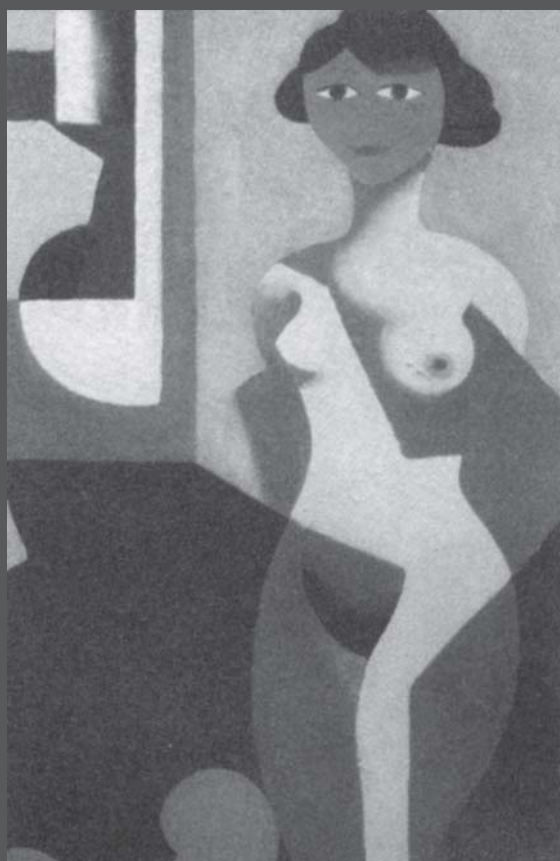
Segui buscando en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO
<http://biblioteca.clacso.edu.ar>

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO)
Latin American Council of Social Sciences (CLACSO)
www.clacso.edu.ar



Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais
Latin American Council of Social Sciences





Derechos sexuales y reproductivos:

la maternidad,
una opción
como derecho

Gaby Cevalco

La reflexión sobre la maternidad en el marco de los derechos sexuales y derechos reproductivos parte del ámbito personal a lo social y, por ello, más sensible a los intereses u olvidos estatales y a la persistencia de los sectores conservadores que continúan viendo el cuerpo de las mujeres como espacios de poder de las iglesias.

Las conferencias internacionales de El Cairo (Población y Desarrollo) y de las Mujeres en Beijing¹, han sido de las que han tenido un mayor y directo impacto en la vida de las personas porque en ellas se trató de integrar los derechos sexuales y derechos reproductivos. Derechos que por décadas han sido y son fundamentales en la agenda de los movimientos feministas.

Como señala Sofía Gruskin, estas conferencias «contribuyeron a dar forma y a definir una base conceptual compartida sobre el contenido de los derechos reproductivos y, simultáneamente, a poner en marcha programas de acción para convertir este concepto en realidad»².

Igualmente significó un cambio de perspectiva en la atención de la salud de las mujeres, vista no solo a partir de su edad reproductiva, como vientres procreadores a los que había que inducir a tener hijas/os o como objeto de control poblacional, sino abordada desde la niñez y desde un enfoque integral que lleve a su bienestar y a su autonomía.

Como señala Giulia Tamayo, la sexualidad y la reproducción habían sido tomadas (y aún lo son si no estamos atentas) «como cuestiones públicas a la hora de establecer prohibiciones, disponer intervenciones e imponer sanciones en nombre de la moral pública, el progreso o el honor nacional»³. Pero al mismo tiempo como «asuntos

privados», como una manera de justificar «la desprotección del Estado frente a condiciones adversas y abusos» que viven las personas y sectores de menor poder económico y social.

En la práctica, el acceso a estos derechos, en cada uno de nuestros países, se da entre avances y retrocesos por la influencia de los sectores conservadores que buscan frenar los logros. Ello demanda una acción permanente del movimiento de mujeres, tanto de incidencia política como campañas públicas.

El derecho de las mujeres a decidir en su vida reproductiva ha sido fundamental para su acceso al mercado de trabajo, a la política y a su empoderamiento en general, y las implicancias del ejercicio de este derecho alcanzan tanto a la persona como a la sociedad en su conjunto.

En términos personales, porque, como señala Tomris Türmen, la capacidad de las mujeres de elegir si tienen hijos, cuándo y con qué frecuencia significa al mismo tiempo «la capacidad de definir su propio desarrollo en términos diferentes a los de la maternidad»⁴. En términos sociales, el decidir el número de hijos ofrece a las familias la posibilidad de definir el uso de los recursos familiares, la educación, alimentación, entre otros.

Por supuesto que las implicancias sociales van más allá de este aspecto, pues la capacidad reproductiva de las mujeres está relacionada a la capacidad de una sociedad de reproducir su fuerza de trabajo. En países desarrollados, donde las mujeres cada vez en mayor número optan por no tener hijos o las parejas deciden tener solo uno/a, el Estado se ve obligado a ofrecer compensaciones que estimulen a las familias a procrearse en mayor número.

El Cairo y los DD.SS. y RR.

El Programa de Acción de El Cairo señala que los «derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas» (7.2).

Entre los documentos más importantes están la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración y Programa de Acción de la

Conferencia Mundial de Viena (1993). En ellos se reconoce el derecho de todas las personas a gozar «del nivel de salud física y mental más alto posible», garantizado por el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales (art. 12). La Convención Contra toda forma de Discriminación hacia la Mujer (1965). El Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos (1966).

El Programa de El Cairo también señala que la salud reproductiva «es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos» (7.2). Y agrega que «la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia».

Este último aspecto implica, por consiguiente, «el derecho del hombre y la mujer a obtener información y métodos de planificación... de su elección... y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos» (7.2).

El Programa de Acción resalta en un párrafo la necesidad de prestar atención «a las necesidades de las/os adolescentes en materia de enseñanza y de servicios con el objeto de que puedan asumir su sexualidad de modo positivo y responsables» (7.3).

Carmel Shalev destaca dos conceptos en relación a los derechos sexuales y derechos reproductivos que comprende el Programa de El Cairo. Por un lado, el de autonomía, la que define como «el derecho de una mujer de tomar decisiones concernientes a su fertilidad y sexualidad sin sufrir coerción ni violencia»⁵. Por otro, el de discriminación. Para ella «la igualdad implica la no discriminación», lo que es importante tener en cuenta en nuestro país. En el caso de la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE), las mujeres se vieron obligadas a recurrir al Tribunal de Garantías Constitucionales para que las más pobres tuvieran acceso a ella, a través de los servicios públicos de salud.

Otra expresión de discriminación es la Ley 28704, que penaliza las relaciones sexuales con menores de 18 años, y que ha traído como consecuencia que las madres adolescentes sean retenidas en hospitales públicos y se ordene la detención de padres adolescentes, aún cuando la relación sexual fue consentida, por cometer «actos antisociales». En el caso de los jóvenes mayores de edad que hayan tenido relaciones sexuales con menores de 18 años podrían ser condenados hasta 25 años de cárcel. Se olvida que las fronteras de edades entre adolescentes y jóvenes son muy frágiles y que es común las relaciones sexuales consentidas entre ellas/os.

La penalización del aborto también es otra forma de discriminación, pues son las mujeres sin recursos las que acuden a prácticas clandestinas que ponen en riesgo su salud y su vida. También la falta de protocolo para la atención del aborto terapéutico.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación hacia la Mujer – Cedaw, en sus recomendaciones luego del informe periódico del Estado peruano (enero-febrero, 2007), señaló con preocupación «que el aborto ilegal continúe siendo una de las causas principales de la alta tasa de mortalidad materna y que la interpretación restrictiva por parte del Estado del aborto terapéutico, que es legal, pueda conducir a que más mujeres recurran al aborto ilegal e inseguro».

Ya el Comité de la Cedaw ha llamado la atención al gobierno peruano en sus informes de 1995 y 1998 con relación a que el aborto sea objeto de sanciones, aun cuando el embarazo sea consecuencia de una violación. Hay que recordar que aproximadamente una de cada tres muertes maternas en el Perú se debe a complicaciones de aborto inseguro, y es el aborto séptico la segunda causa⁶.

El rol del movimiento de mujeres

Que los derechos sexuales y derechos reproductivos fueran incorporados a los consensos mundiales de los derechos humanos fue una acción del movimiento feminista, que aportó tanto en la investigación de una realidad mayormente invisibilizada y en la construcción de los térmi-

Se olvida que las fronteras de edades entre adolescentes y jóvenes son muy frágiles y que es común las relaciones sexuales consentidas entre ellas/os.



nos de los derechos y libertades que debían implicar.

Ha sido y es fundamental su rol vigilante y para ello permanentemente están desarrollando estrategias para que se respeten y sean una realidad en la vida de las mujeres. Como se ha señalado, estos derechos son muy sensibles frente a la moral y permanentemente se ven amenazados por sectores conservadores que tienen impacto de acuerdo a su influencia en el gobierno. Recordemos que en el régimen anterior se aprobó el Día del No Nacido.

En la actualidad el movimiento feminista viene desarrollando la Campaña por la Convención de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos, que se inició en el año 1999. En su Ma-

nifiesto (2002, 2006) plantean la necesidad de ampliar los «referentes de transformación» y desde allí recuperar «la diversidad de formas de existencia de las mujeres y de todos los seres humanos» (p. 10).

Señalan la urgencia de reconceptualizar el cuerpo en su dimensión política, sobre el cual actúan el Estado, la familia, la religión, el mercado, las fuerzas fundamentalistas y la sociedad en general, de manera que siempre está en el centro de «proyectos democráticos o proyectos autoritarios» (p. 12).

En este sentido, la «radicalidad de los derechos humanos se sustenta en la conjunción del cambio personal con el cambio social» (p. 13), un aspecto fundamental teniendo en cuenta que no hay derechos más personales y más políticos que los derechos sexuales y derechos reproductivos, que abarcan la vida del ser humano desde su nacimiento.

Históricamente, el control de la capacidad reproductiva de las mujeres ha sido el mecanismo de control de sus vidas en sus expresiones diversas, lo que exige reafirmar la autonomía de las mujeres y ello empieza por confrontar la división sexual del trabajo.

El sentido de realización de las mujeres centrado en la maternidad hoy está cambiando, y en este aspecto el Manifiesto enfatiza que «la reproducción es un derecho y un placer cuando es decidida libremente» (27). Libertad que aún no es una realidad en nuestro país por la existencia de normas vistas desde una perspectiva moralista, religiosa, y no desde la dimensión de autonomía de cada persona. Por ello, toda agenda en derechos sexuales y derechos reproductivos obliga a colocar la urgencia de un Estado laico como una condición para una real democracia.

Las mujeres rurales

Un sector de especial atención en el tema de los derechos sexuales y derechos reproductivos son las mujeres rurales, por el impacto que tiene en su vida la discriminación y exclusión imperante en nuestro país. Un ejemplo de ello es que la tasa global de fecundidad de las mujeres rurales, según cifras oficiales, es de 4.3 hijos por mujer mien-

tras el ideal deseado por ellas es de 2.5 hijos. Esto tiene su correlato en una mortalidad materna mucho mayor en los sectores rurales. Por ejemplo, esta tasa se eleva a 271.2 en Cusco.

Por ello, estos derechos deben abordarse desde un enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad. En este sentido, es fundamental la afirmación del Manifiesto de la Campaña de la Convención sobre la urgencia de recuperar los derechos económicos, sociales y culturales «como expresión inalienable de la ciudadanía y de los derechos humanos frente a la inequidad en la redistribución de la riqueza» (p. 21).

La mortalidad materna de las mujeres rurales es sobre todo consecuencia de su falta de ejercicio de derechos, que parte por la identificación. No tener un documento de identidad las hace invisibles para el Estado peruano y, por consiguiente, no van a tener oportunidad de tener acceso a los beneficios que éste otorga, como parte de sus obligaciones.

La interculturalidad significa «un cambio sustancial de enfoque», como dice Fidel Tubino, que debe reflejarse desde la manera como se concibe, se diseña y se implementa un proyecto o una política pública (chacarera 31). La interculturalidad implica reconocer la cultura del/a otra/o, comprenderlo/a desde su propia perspectiva de ver la vida, de tal manera de establecer un diálogo que haga propicio el desarrollo.

Este enfoque también obliga a que las mujeres, en este caso, participen activamente como agentes de cambio desde su propia realidad en la medida que sus capacidades son desarrolladas. Todo un reto para nuestras autoridades, pero también para las ONG y el movimiento de mujeres, como nosotras las feministas (*Gaby Cevasco*).

¹ Realizadas en 1994 y 1995, respectivamente.

² Las implicancias conceptuales y prácticas de los derechos reproductivos y sexuales. ¿Cuánto hemos avanzado? En: *Derechos sexuales y reproductivos. Aportes y diálogos contemporáneos*. PEG-UNMSM, Centro Flora Tristán, 2001. P. 11.

³ *Bajo la piel. Derechos sexuales, derechos reproductivos*. PEG-UNMSM, Centro Flora Tristán. 2001. P. 7.

⁴ Derechos reproductivos: ¿Cómo avanzar? Ibid. P. 43-44.

⁵ El derecho a la salud sexual y reproductiva: La CIPD y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. Ibid. P. 64.

⁶ *Informe alternativo al Sexto Informe Periódico del Estado Peruano al Comité de la Cedaw*. Noviembre 2006. Cladem, Centro Flora Tristán, Manuela Ramos, Demus. P. 168.